



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I., tres de febrero de dos mil veintitrés

PROCESO	Ejecutivo conexo
DEMANDANTE	Luis Guillermo Suárez Navarro y otro.
DEMANDADO	Iván Darío Gaviria Alzate y otros.
PROCEDENCIA	Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín
CUDR	05001-31-03-004–2019-00442-02
RADICADO INTERNO	043-22
PROVIDENCIA	030-23
DECISIÓN	Por expresa disposición legal, cuando se esté ejecutando la obligación contenida en sentencia, el demandado sólo puede alegar las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre y cuando se hubieren configurada después de proferida la decisión. Los litisconsortes son parte en el proceso, por tanto, lo que se decida con relación al objeto de controversia los vincula, ya sea favorable o desfavorablemente. CONFIRMA.

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la parte demandada en contra del auto del 28 de abril de 2022, mediante el cual se rechazó de plano la excepción de mérito denominada falta de legitimación en la causa por pasiva, por improcedente.

ANTECEDENTES

1.- Hechos y pretensiones. Luis Guillermo Suárez Navarro y Ana María Mesa de Suárez, presentaron demanda constitutiva de proceso ejecutivo en contra de BBVA COLOMBIA, CENTRAOL DE INVERSIONES Y COMPAÑÍA DE GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, mediante la cual pretenden el recaudo de las obligaciones contenidas en las sentencias proferidas por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medellín el 31 de mayo de 2010, confirmada por el Tribunal Superior de Manizales en providencia del 29 de agosto de 2019.

2.- Oposición y trámite. Una vez librado el mandamiento de pago en la forma indicado por este Despacho mediante proveído del 29 de marzo de 2022, los encausados fueron notificados de la orden de apremio por estados, habiéndose propuesto por parte del Banco BBVA COLOMBIA S.A. recurso de reposición contra el mismo y además la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

3.- El auto apelado. Luego, por providencia del 28 de abril de 2022, el *a quo* rechazó el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto del cuatro de abril de 2022, por haber sido presentado de manera extemporánea. Del mismo modo, rechazó de plano la excepción de mérito denominada falta de legitimación en la causa por pasiva, ante la improcedencia de la misma, por tratarse del cobro de una obligación contenida en una sentencia judicial.

4.- La apelación. Oportunamente el vocero judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación, argumentando que, si bien la excepción propuesta no tiene una tipificación específica en el artículo 442 del Código General del Proceso, el exceso de ritualidad no puede perjudicar los derechos sustanciales de ninguna de las partes del proceso; ello conforme lo establece el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia.

Además, insistió en que no le era exigible la obligación, con base en similares argumentos a los presentados al momento que interpuso recurso contra el auto del 22 de enero de 2020, el cual ya fue resuelto por esta Corporación mediante proveído del 29 de marzo de 2022. En consecuencia, concedió la alzada propuesta por auto del seis de mayo de 202.

CONSIDERACIONES

1.- Ejecución de obligación impuesta en providencia judicial. El artículo 305 del Código General del Proceso que puede exigirse el cumplimiento de una obligación impuesta en una providencia judicial, una vez ésta se encuentre ejecutoriada, o en su defecto, a partir del día siguiente al de la notificación del auto que ordena cumplir lo resuelto por el superior, salvo que en la misma decisión se haya otorgado un plazo para el cumplimiento, o se haya sometido a una condición, evento en el cual solo podrá ejecutarse una vez fenezca el término concedido, el

cual empezará a correr a partir de la ejecutoria de la respectiva providencia o de la notificación del auto antes referenciado, o una vez demostrado el acaecimiento de la respectiva condición, según sea el caso.

El precepto 306 del mismo Estatuto regula la forma como debe adelantarse el procedimiento ejecutivo, precisando en primer término que no hay necesidad de presentar demanda, ya que basta la simple solicitud de ejecución de la providencia judicial que pretenda hacer cumplir, ante el mismo juez que profirió la providencia para que se adelante a continuación del proceso en la que se dictó y dentro del mismo expediente.

Del mismo modo indica la citada normativa que, elevada la aludida solicitud, el funcionario judicial “*librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia*” que se pretende hacer cumplir por esa vía, y de ser el caso, por las costas judiciales que hayan sido aprobadas en el mismo asunto, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.

Por su parte el numeral segundo del artículo 442 ibídem, señala que: “*..Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida...*”

2.- Caso concreto. En el asunto objeto de estudio, el problema jurídico a resolver será entonces, si era procedente el rechazo de plano de la excepción de mérito de falta de legitimación en la causa por pasiva, por no encontrarse enlistada en el numeral segundo del artículo 442 del C. General del Proceso.

En efecto, y frente a ello no existe discusión, de acuerdo con la normativa citada en las consideraciones, cuando se esté ejecutando la obligación de contenida en sentencia, el demandado sólo puede alegar las excepciones de pago,

compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre y cuando se hubieren configurado después de proferida la decisión.

No obstante, el recurrente señala que aplicar este precepto de manera objetiva, es situarse en un exceso de ritualidad que afecta su derecho sustancial, máxime que éste último tiene prevalencia sobre el derecho procesal. Para la Sala, este argumento carece de fundamento para el caso concreto, ya que, como lo establece el artículo 13 del C. General del Proceso, las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, por tanto, no pueden ser modificadas por los jueces o las partes. Incluso, obviar la regla procesal, en lugar contribuir con el derecho sustancial, termina afectando el debido proceso, dado que se sorprendería al actual ejecutante con una discusión que estaba zanjada desde el proceso anterior.

Obsérvese, demás, que la mencionada norma procesal dejó claro que **solo** proceden las excepciones allí anotadas, cuando se esté ejecutando un crédito reconocido por medio de providencia judicial, ello en atención a que el ejecutado estuvo presente en el trámite antecedente, y, por tanto, tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa allí. En esa medida, habiendo tenido la oportunidad de haber alegado cualquier medio de defensa al interior del anterior proceso, el legislador dejó por establecido que, al momento de la ejecución de la sentencia, no puedan proponerse excepciones distintas a las ya aludidas.

Sobre la aplicación y finalidad de las normas procesales, la Corte Constitucional en sentencia C-029 de 1995, MP. Jorge Arango Mejía, indicó que:

“...Las normas procesales tienen una función instrumental. Pero es un error pensar que esta circunstancia les reste importancia o pueda llevar a descuidar su aplicación. Por el contrario, el derecho procesal es la mejor garantía del cumplimiento del principio de la igualdad ante la ley. Es, además, un freno eficaz contra la arbitrariedad. Yerra, en consecuencia, quien pretenda que en un Estado de derecho se puede administrar justicia con olvido de las formas procesales. Pretensión que sólo tendría cabida en un concepto paternalista de la organización social, incompatible con el Estado de derecho...”

Bajo estas condiciones, se evidencia que en este asunto no se configura el exceso ritual alegado por el apelante, en tanto la aplicación de la norma de ninguna

manera está siendo obstáculo para la efectividad del derecho sustancial y mucho menos se está renunciando a la verdad objetiva del proceso, en los términos de lo promulgado por nuestro máximo Tribunal Constitucional.

De otro lado, no debe dejarse de lado por parte del apoderado de la parte apelante que, esta Sala ya había resuelto lo referente a la ejecución de las sumas de dinero cuyo pago se había impuesto en sentencias judiciales, concluyendo que, en este caso, la orden de pago no lo debía recaer en contra de su poderdante, sino también de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. Y COMPAÑÍA DE GERENCIAMIENTO DE ACTIVO S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, teniendo en cuenta su calidad de litisconsortes reconocidos al interior del proceso donde de profirió la respectiva decisión.

En consecuencia, se confirmará la decisión apelada y se condenará en costas al recurrente.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **CONFIRMA** el auto proferido por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 28 de abril de 2022, dentro del proceso EJECUTIVO instaurado por LUIS GUILLERMO SUÁREZ NAVARRO y ANA MARIA MESA DE SUÁREZ en contra de BBVA COLOMBIA, CENTRAL DE INVERSIONES Y COMPAÑÍA DE GERENCIAMIENTO DE ACTIVOS S.A. EN LIQUIDACIÓN.

Se condena en costas a la parte demandada BANCO BBVA S.A., las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Juzgado de primera instancia. Como agencias en derecho se fija la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, esto es, UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS M.L. (\$1.160.000).

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO
Magistrado